



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

En Cancún, Quintana Roo, siendo las **trece horas con treinta minutos (huso horario del sureste) nueve de diciembre de dos mil veinticinco**, hora y fecha señaladas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo **921/2025**, promovido por **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo** en representación de la persona jurídica **“Proyectos Ejecutivos Sustentables”**, Sociedad Anónima de Capital Variable, estando en audiencia pública de derecho **María José Pech Sáenz**, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien actúa con **Clara Ivet Rodríguez Veitía**, Secretaria que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara legalmente abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente; asimismo, no fue solicitada por parte legítima la realización de la presente audiencia a través de videoconferencia, como medio para la presencia personal de las partes, por lo que no se consideró necesario el uso de dicha herramienta.

De la misma forma, la Secretaria **hace constar y certifica**: Que los datos e información con los que se da cuenta y los que se utilizan en la presente audiencia y la resolución que se dicta a continuación, fueron revisados personalmente, quien además verificó la vigencia de los preceptos y criterios utilizados. **Doy fe.**

ESTADO DE AUTOS



Acto seguido, la Secretaria da cuenta a la juez, con las constancias que integran este expediente, entre las que destacan:

CONSTANCIAS
Escrito inicial de demanda
Acuerdo de prevención de veinticinco de septiembre del año en curso
Escrito de cumplimiento de prevención
Acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticinco , en el que se le requirió el reconocimiento de firma
Diligencia de uno de octubre del presente año de reconocimiento de firma
Acuerdo admisorio de tres de octubre de dos mil veinticinco
Constancia de notificación realizada al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado federal
Informes justificados rendidos por las autoridades responsables
Constancia de emplazamiento de los terceros interesados

Asimismo, se hace constar que al realizar una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y en el libro de registro de promociones de la Oficialía de Partes de este Juzgado, se advierte las promociones con registros **18455, 18461 y 18459.**

A lo que la **Juez acuerda:** Téngase por hecha la anterior relación de constancias y la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar.

Por otro lado, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la persona quejosa, mediante el cual solicita sea reconocido el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo anterior, se provee:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dígasele que **no ha lugar acordar favorable a su petición**, toda vez que a este no le reviste el carácter de tercero interesado, conforme a lo previsto en el numeral 5 de la Ley de Amparo, en el que señala:

“Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa:

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Además, téngase por recibo el escrito signado por el tercero interesado **Miguel Ángel Hernández Morales**, quien se ostenta como apoderado de **Ejecutivos de Turismo Sustentable, Sociedad Anónima de Capital Variable**, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos.

Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas a manera de alegatos las manifestaciones realizadas, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno de la audiencia constitucional.

Por otro lado, se tiene por recibido el escrito de cuenta, remitido por la parte quejosa, y en atención a su contenido, se provee:

En consecuencia, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las **documentales** que adjunta a su libelo de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la **audiencia constitucional**.

Asimismo, se le solicitando que se gire oficio a las siguientes autoridades:

1. **Fiscal de la Unidad Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo**, la copia autentica del contrato presentado por el Tercero interesado dentro de la Carpeta de Investigación FGE/QROO/BJ/08/17585/2025;

- 2. Juez Décimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México**, a efecto de que remita copia certificada del acta constitutiva del "**Grupo Dolphin**", copia certificada de los documentos en donde se



acredite cuáles son las empresas de manera legítima pertenecen al "Grupo Dolphin" y copia certificada del acta constitutiva en donde Proyectos Ejecutivos Sustentables, S.A. de C.V. pertenezca al "Grupo Dolphin";

3. Lic. **Blanca Elena Pineda Morin**, Directora General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, ubicado en Calle Pachuca No. **189**, Piso **11**, Colonia **Condesa**, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. **06140**, Ciudad de México, a efecto de que informe si existe la persona moral denominada "**Grupo Dolphin**", indicando su estatus legal, objeto social y la identidad de sus socios o accionistas registrados.

4. **Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo, a través de la Delegación del Municipio de Benito Juárez** ubicado Avenida Bonampak, esquina Nichupte, Supermanzana 8, Manzana 1, Lote 4, Oficina 3, Plaza Vivendi América, Código Postal 77504, de la Ciudad de Cancún Quintana Roo a efecto de que informe si existe la persona moral denominada "**Grupo Dolphin**", indicando su estatus legal, objeto social y la identidad de sus socios o accionistas registrados.

5. Instituto Nacional de Migración, ubicado en Av. **Carlos J. Nader**, Supermanzana **5**, Lote **1**, Centro, **77500**, de la Ciudad de Cancún, del Estado de Quintana Roo, para que proporcione el registro de entradas y salidas del país correspondientes de la Licenciada **Enna Rosa Valencia Rosado**, comprendidas entre los meses de septiembre de 2024 y julio de 2025.

6. Notaría de la Lic. **Enna Rosa Valencia Rosado**, Notaría número **14** del Estado de Quintana



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Roo, con Residencia en la Ciudad de Cancún, ubicado en Calle **2 Pecari 41**, código postal **77500**, de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, solicitando que informe sobre todas las actuaciones notariales realizadas entre el 2 de septiembre de 2024 y el 11 de julio de 2025, y que remita copia certificada de todas las actuaciones correspondientes a dichos periodo.

7. **Área Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)**, ubicado en ubicada en Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección, **Alcaldía Miguel Hidalgo**, Ciudad de México, C.P. 11320, para que informe si la persona moral "**Grupo Dolphin**" cuenta con autorización o concesión vigente relacionada con la operación de algún parque o desarrollo eco turístico;

8. Representante legal de **Controladora Dolphin, S.A. de C.V.**, con domicilio en Piso 10, Condominio **Azuna**, Avenida **Sayil** esquina con Avenida **Savignac**, Malecón **Tajamar**, C.P. **77503**, Cancún, Quintana Roo, para que, dentro del plazo que su Señoría estime pertinente, informe y remita a este H. Juzgado copia certificada del acta constitutiva de la persona moral denominada "**Grupo Dolphin**", en caso de existir relación societaria, de control, administración o cualquier otra forma de vinculación entre ambas personas morales.

Al respecto, dígamele que no es factible proveer de conformidad su petición; toda vez de las autoridades señaladas con los numerales **1** y **8**, no acreditó haber hecho la solicitud de los documentos ante las autoridades responsable, en términos del numeral 121 de la Ley de Amparo.



En efecto, el citado dispositivo normativo señala, lo siguiente:

*“Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, **los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado.** Si no lo hacen, **la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia,** lo que se acordará **siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración,** sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días.*

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.”

Por tanto, no se surte el supuesto de la hipótesis normativa, en razón de que la persona quejosa no acredita haber solicitado previamente las documentales que solicita sean requeridas por este juzgado y además, no manifiesta que le hayan sido negadas dichas constancias, es entonces que este juzgado se encuentra impedido para proveer de conformidad su solicitud.

Aunado a lo anterior, no ha lugar a acceder a su petición en relación con la totalidad de las documentales que solicita sean requeridas por esta juzgadora, ya que la petición la realiza fuera del plazo legal previsto para tales efectos.

En efecto, dichas pruebas debieron de ofrecerse **cinco** **días hábiles antes de la audiencia constitucional**, sin contar



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el del ofrecimiento ni el señalado por la propia audiencia, ya que no se trata de hechos supervinientes desconocidos por el promovente.

Es aplicable la jurisprudencia 2ª/J. 79/2018, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro **2017572**, Décima Época, Página 1198, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, cuyo rubro y texto dice lo siguiente:

“PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditéz del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia.”



Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la **prueba documental** que anexa en el ocurso de cuenta, la cual se tomara en cuenta en el momento procesal oportuno.

Luego, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, fórmese el legajo correspondiente (**legajo I**).

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

La Secretaria **hace constar y certifica:** **1)** Que en el presente juicio de amparo obran los informes justificados de las autoridades responsables; **2)** La notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; **3)** Que **sí** se reconoció el carácter de terceros interesados en el presente a juicio a **i) Controladora Dolphin**, Sociedad Anónima de Capital Variable, **(ii) Aqua Tours**, Sociedad Anónima de Capital Variable, **(iii) Dolphin Austral Holdings**, Sociedad Anónima de Capital Variable, **(iv) Promotora Garrafón**, Sociedad Anónima de Capital Variable, **(v) Viajero Cibernético**, Sociedad Anónima de Capital Variable, **(vi) Ejecutivos de Turismo Sustentable**, Sociedad Anónima de Capital Variable, y **(vii) Dolphin Capital Company**, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; **4)** Que **no** se amplió la demanda de amparo; **5)** Que las constancias que integran el expediente en que se actúa se encuentran completas y legibles, las cuales son suficientes para resolverlo; **6)** Que **no** existe medio de impugnación por remitir ni incidencias pendientes de resolver en el presente asunto, y; **7)** Que por acuerdo de **once de noviembre del año en curso**, se señalaron las **trece horas con treinta minutos (huso horario zona sureste) del nueve de diciembre de dos mil veinticinco** para que tenga verificativo la audiencia constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Además, que las partes **no han ejercido su derecho de oponerse a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia**, previsto en el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de sus respectivos informes:

OFICIOS	AUTORIDADES RESPONSABLES	ESTADO	SENTIDO
<u>CIUDAD DE MÉXICO</u>			
21860/20 25	1.- Juez Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México	Rinde [17939] 28/11/2025	Cierto
<u>CANCÚN, QUINTANA ROO</u>			
21861/20 25	2.Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15442] 22/10/2025	Niega
21862/20 25	3.Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15028] 14/10/2025	Niega
21863/20 25	4.Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [14974 y 15118] 14/10/2025	Niega
21864/20 25	5.Juzgado Primero Civil Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15033] 14/10/2025	Niega
21865/20 25	6.Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15027] 14/10/2025	Niega
21866/20 25	7.Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15087] 14/10/2025	Niega
21867/20 25	8. Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15047] 14/10/2025	Niega

A lo que la **Juez** provee: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables.

PERIODO PROBATORIO

La **Juez** declara abierto el período probatorio, en el que la Secretaria hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción:



CLARA IVET RODRIGUEZ VEITIA
7066620636a6632000000000000000000117e9
15/05/26 18:00:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

General del Estado de Quintana Roo

Tercero interesado
Ejecutivos
Sustentables,
Sociedad Anónima
de Capital Variable

- i. Copia digitalizada del convenio de terminación del contrato de operación de uno de septiembre de dos mil veinticuatro, celebrado entre **Ejecutivos de Turismo Sustentable**, Sociedad Anónima de Capital Variable y **Proyectos Ejecutivos Sustentables**, Sociedad Anónima de Capital Variable de dos de septiembre de dos mil veinticuatro.
- ii. Copia digitalizada del instrumento público número **dos mil setecientos veintitrés de treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro**, firmado ante la notaria público número sesenta del Estado de Quintana Roo.

**Juez Primero
Mercantil de
Primera Instancia
del Distrito
Judicial de Cancún**

- i. Copia certificada de las constancias del exhorto 74/2025 de su índice

**Juez Décimo de lo
Civil de Proceso
Escrito de la
Ciudad de México**

- i. Constancias digitalizadas de los autos que integran el juicio ordinario mercantil de **222/2025** de su índice

A lo anterior, la **Juez** acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite las referidas pruebas descritas con antelación en el cuadro que antecede, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza y la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno.

Con lo anterior, **se declara cerrado dicho periodo.**

PERIODO DE ALEGATOS

Seguidamente, y no existiendo más pruebas que desahogar, **se abre la fase de ALEGATOS** y la Secretaria hace constar que la persona quejosa **no** formuló manifestaciones en vía de alegatos, que el tercero interesado



sí formulo alegatos y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito **no** presentó pedimento ministerial.

Al efecto, **la Juez acuerda:** Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, formulada las manifestaciones en vía de alegatos por parte del tercero interesado, por precluido el derecho de la persona quejosa para hacer manifestaciones en vía de alegatos y por perdido el derecho de formular pedimento de la representación social; **con lo que se cierra este periodo.**

La Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales conducentes.

A continuación, al encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución correspondiente; y,

S E N T E N C I A

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto **921/2025**, promovido por **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo** en representación de la persona jurídica **“Proyectos Ejecutivos Sustentables”, Sociedad Anónima de Capital Variable**, contra los actos del **Juez Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México y otras autoridades**, por considerarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 2, 5, 6, 17, 18, 20 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Demanda de amparo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por escrito presentado el **diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco**, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo** en representación de la persona jurídica “**Proyectos Ejecutivos Sustentables**”, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se especifican:

"1. COMO AUTORIDAD ORDENADORA:

a) JUEZ DÉCIMO CIVIL DE PROCESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2.-

2. COMO AUTORIDAD EJECUTORA:

b) JUZGADO 1º MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

c) JUZGADO 2º MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

d) JUZGADO 3º MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

e) JUZGADO 1° CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

f) JUZGADO 2º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

g) JUZGADO 3º CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

h) JUZGADO 4° CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CANCÚN

IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:

“(i) la reinstalación inmediata de la Supuesta Nueva Administración en la posesión y control del inmueble “Nizuc”, propiedad de la empresa **Ejecutivos de Turismo Sustentable**, (ii) la suspensión de los efectos de cualquier contrato de operación, arrendamiento o similar celebrado entre cualquiera de las empresas que integran el **Grupo Dolphin** y **Proyectos Ejecutivos Sustentables**; y (iii) la suspensión de los poderes otorgados al Señor **Fidel Ladrón de Guevara**, con los que representa a **PES** en cualquier acto relacionado con las empresas que integran el **Grupo Dolphin**, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio. Para tal efecto, se deja libertad de jurisdicción al Juez de Cancún a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el proveído de **28 de agosto de 2025** dictado por el Juez de la CDMX.”

SEGUNDO. Aclaración de demanda



“ACTO RECLAMADO. Se ha cumplido con lo que establece el artículo 108 de la Ley en Materia, se precisa, el acto reclamado es el desalojo que mi representada tiene sobre la posesión legal y pacífica sobre el inmueble localizado en Lote 5-02, Mza. 60, Sección D Tercera Etapa, Zona Hotelera de Cancún, Q. Roo, inmueble que cuenta con las instalaciones para un DELFINARIO.

TERCERO. Tercero interesado

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Variable, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que sucedió el veintitrés de octubre de dos mil veinticinco (Hojas 196 y 197).

Así las cosas, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tener del acta que antecede y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia

Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, es competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo y 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y además, conforme a lo previsto en el punto cuarto de la fracción XXVII del párrafo segundo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito¹; y concretamente en cuanto se establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum; toda vez que en el caso, se

¹ Reformado por Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós.



CLARA IVET RODRIGUEZ VETTA
706a6620636a66320000000000000000117e9
15/05/26 18:00:00

reclama un acto de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde la suscrita juzgadora ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados

En términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procederá a precisar el acto que la parte impetrante de la protección constitucional reclama de la autoridad responsable.

En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ***“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”***.

Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, del escrito aclaratorio, así como; del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que remitió en su apoyo, queda en relieve que la parte quejosa **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo**, en representación de la persona jurídica “**Proyectos Ejecutivos Sustentables**”, Sociedad Anónima de Capital Variable reclama de **Juez Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México y otras autoridades**, el acto que se precisa:

La falta de notificación del juicio ordinario mercantil **222/2025** del índice del Juzgado Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México y como consecuencia;

 El desalojo del inmueble identificado como



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“Nizuc”, ubicado en el lote 5-02, Mza. 60, sección D tercera etapa, zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, que cuenta con las instalaciones para delfinario.

TERCERO. Inexistencia del acto reclamado

Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, como se muestra a continuación:

OFICIOS	AUTORIDADES RESPONSABLES	ESTADO	SENTIDO
<u>CANCÚN, QUINTANA ROO</u>			
21862/2025	3.Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15028] 14/10/2025	Niega
21863/2025	4.Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [14974 y 15118] 14/10/2025	Niega
21864/2025	5.Juzgado Primero Civil Mercantil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15033] 14/10/2025	Niega
21865/2025	6.Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15027] 14/10/2025	Niega
21866/2025	7.Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15087] 14/10/2025	Niega
21867/2025	8. Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Cancún	Rinde [15047] 14/10/2025	Niega

Informes que tienen el carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, los cuales merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo², por disposición expresa de su numeral segundo, los que resultan aptos para tener por demostrada la inexistencia de los actos que se les atribuyen, toda vez que de su contenido no se advierte la participación de las citadas responsables.

“ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. *La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.”*

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, registro 187728, que establece:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

“PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.”

Así como la diversa jurisprudencia VI. 2o. J/20 de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte (Julio a Diciembre de 1989), página 627, registro 227634, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS



ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.”

Ante tales circunstancias y sin que la persona quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece:

"ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y...”

Sustenta lo anterior, por analogía la tesis IV.3o.72 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, de enero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, consultable en la página 254, registro 213793, que a la letra señala:

“JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CUARTO. Existencia del acto reclamado

Son **ciertos** los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México y Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Cancún, precisado en el considerando que antecede, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado.

Cabe señalar que la existencia de la resolución reclamada se corrobora además con las constancias que la magistrada responsable remitió en apoyo a sus informes justificados, consistentes en: copia certificada del exhorto **74/2025** del índice del **Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Cancún** y las constancias que integran el juicio ordinario 222/2025 del índice del **Juez Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México**, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por ser documentos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley.

Apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002815, visible en la página 830, Tomo II, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, Quinta Época. **“INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO”**.

También cobra sustento, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995,



que indica: **"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."**

También cobra sustento, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004362, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: ***“VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL”.***

QUINTO. Causas de improcedencia

Previo al estudio de fondo del asunto y por ser una cuestión de orden público, se realiza el examen de las causales de improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé que la autoridad que conozca de un juicio de derechos estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes.³

En el caso, esta juzgadora advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el **arábigo 61**,

³ Ilustra lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: **“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.”**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: Octava Época; tomo VII, de mayo de 1991; página: 95; registro: 222780.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fracción XII, de la Ley de Amparo.

Para demostrar la conclusión alcanzada, es preciso citar el contenido de la porción normativa del precepto que prevé la causa de improcedencia invocada, que establece:

Artículo 61. *El juicio de amparo es improcedente:*

[...]

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

[...]

Conforme al numeral transcrito, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del cardinal 5 de la Ley de la Materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

A su vez, el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, prevé:

“Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

1. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

[...]"

De igual forma, el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

[...]"

Del precepto constitucional transcrito, en lo que interesa, se desprende que, el juicio de derechos se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, por quien tenga un derecho o un interés legítimo, siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico.

En efecto, al juicio constitucional puede acudir cualquier persona que manifieste tener un interés jurídico o legítimo, que sea vulnerado por el acto de autoridad reclamado; por tanto, en el caso, conviene precisar qué se entiende por interés jurídico y legítimo.

Acorde a las interpretaciones que, sobre el tema ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que los intereses de los gobernados se clasifican en simple o mera facultad, jurídico y legítimo, no obstante, atendiendo al caso en estudio, al tratarse de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, sólo se abordará el análisis del interés jurídico.

Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia, la parte quejosa debe acreditar su interés jurídico para la procedencia del juicio de



Efectivamente, debe señalarse que el denominado interés jurídico es un concepto que se prevé tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley de Amparo y que constituye, cuando el acto reclamado proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, uno de los requisitos que se deben cubrir en cumplimiento al presupuesto procesal de procedencia de la acción constitucional.

De acuerdo con lo anterior y con el sistema previsto tanto por la fracción I del artículo 107 del máximo ordenamiento jurídico, como por la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación.

De lo que se puede concluir lo siguiente:

- a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad;
- b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y
- c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Cuestión que se robustece, con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ***“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.”***⁴

De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de

⁴ *Jurisprudencia de la Novena Época en el Semanario Judicial de la Federación, visible con el registro digital: 170500.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Tal y como se anticipó, en el presente caso se, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para arribar a la conclusión anterior, partimos del hecho de que, en la demanda de amparo, se reclaman actos propios del juicio natural como son

- La falta de notificación del juicio ordinario mercantil 222/2025 del índice del Juzgado Décimo Civil de Proceso de la Ciudad de México y como consecuencia;
- El desalojo del inmueble identificado como “Nizuc”, ubicado en el lote 5-02, Mza. 60, sección D tercera etapa, zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, que cuenta con las instalaciones para delfinario.

Lo anterior, toda vez que considera que las autoridades responsables lo pretenden privar de sus derechos reales respecto del aludido inmueble del que señala que su representada tiene sobre la posesión legal derivada de un contrato de operación celebrado con **Ejecutivos de Turismo Sustentable**, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el uno de septiembre de dos mil veinticuatro, por medio del cual la moral referida (en calidad de propietaria, entrega la posesión de los bienes que ahí se describen (albercas, áreas de servicio, etc.) del inmueble en la Declaración C) de dicho documento, esto es, **Lote 5-02, Mza. 70, Sección D Tercera Etapa, Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo.**



Sin embargo, la suscrita considera que el acto **no afecta el interés jurídico de la parte quejosa**, ya que no formó parte del procedimiento de origen de los actos reclamados y por su parte el inmueble sobre el cual se ordenó en el juicio de origen *la reinstalación inmediata de la nueva administración de Grupo Dolphin en la posesión y control* es el identificado como *"Nizuc" ubicado en el lote cinco guion cero dos de la manzana sesenta, sección "d" tercera etapa, zona hotelera de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, México.*

Lo jurídicamente relevante es que el predio afectado en el juicio de origen del acto reclamado, difiere del señalado en el contrato con el que la parte quejosa pretende acreditar el interés jurídico; ya que en dicho documento privado se hace referencia a la **manzana setenta**; mientras que el quejoso en sus escritos de demanda y aclaratorio, así como la autoridad responsable lo identifican en la **manzana sesenta**.

En efecto, si bien el quejoso hizo mención en su demanda de amparo al predio que defiende ubicado en Lote 5-02, Manzana 60, Sección D Tercera Etapa, Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo, asimismo aportó diversas documentales⁷, que unas van dirigidas a acreditar la

7 i. Copia simple de la credencial para votar de **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo**, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. ii. Copia certificada y copia simple de la escritura pública dos mil seiscientos cincuenta y cuatro de veinticinco de junio de dos mil veinticinco, pasada ante la fe de Gabriela Lima Laurents, corredor público tres de la plaza del Estado de Quintana Roo, que contiene el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad **“Proyectos Ejecutivos Sustentables”**, Sociedad Anónima de Capital Variable. iii. Copia certificada y copia simple del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de veintitrés de junio de dos mil veinticinco. iv. Copia simple del oficio N° **SPARN/DGVS/00111/25** de diez de enero de dos mil veinticinco vi. Copia simple de la licencia de funcionamiento **03201**. vii. Copia simple de la licencia de funcionamiento **02440850**. viii. Copia simple de la licencia de funcionamiento **02466405**. ix. Copia simple de la licencia de funcionamiento **02440849**. x. Copia simple de la licencia de funcionamiento **02465224**. xi. Copia simple del escrito dirigido a la Gobernadora del Estado de Quintana Roo. xii. Copia simple del Contrato de comodato constante de tres hojas. xiii. Copia simple del acta de inspección con número de folio **0608/2025** expedida por el Servicio de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

personalidad del promovente y otras hacen referencia al mismo predio ubicado en la manzana sesenta; asimismo, en la medida cautelar que se reclama en el en el juicio civil de origen **222/2025** del índice del Juzgado Décimo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México se decretó la orden de entrega de la posesión de un inmueble en la **manzana sesenta**, el cual es diverso al que figura en el contrato con que la moral quejosa pretender acreditar la posesión que defiende; es así ya que este último hace mención a la **manzana sesenta**, de ahí que no le asista interés jurídico sobre un bien inmueble del que no acreditó poseer algún derecho de real.

De ahí que se llega a la convicción que, dicho medio probatorio **no es apto para demostrar la afectación al interés jurídico de la accionante**, porque no existe medio de convicción que acredite que los quejosos son titulares del derecho de posesión sobre inmueble afectado en el juicio de origen.

Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. xiv. Copia simple de la Declaración Mensual de Pago de Impuestos sobre Nóminas con folio **4166028525**, de diez de marzo de dos mil veinticinco. xvi. 16 acuses de consultas de CFDI con fechas de emisión de 2024-10-15 xvii. 02 acuses de consultas de CFDI con fechas de emisión de 2024-10-23 xviii. 02 acuses de consultas de CFDI con fechas de emisión de 2024-10-29. xix. 02 acuses de consultas de CFDI con fechas de emisión de 2024-10-31. xx. Copia simple del escrito de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco xxi. Copia simple del recibo oficial de pago de diez de enero de dos mil veinticuatro, expedido por la Tesorería Municipal de esta Ciudad xxii. Copia simple de la Licencia de Funcionamiento con número **02438526** xxiii. Copia simple del acuse de movimientos de Actualización de Situación Fiscal xxiv. Copias simples del Formulario Múltiple de Trámites de veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco xxv. Copia simple del Contrato de Compra-venta de Activos y Cesión de Derechos de quince de octubre de dos mil veinticuatro. xxvi. Copia simple del Contrato de comisión mercantil de tres de septiembre de dos mil veinticuatro. xxvii. 2 copias simples del Contrato de comisión mercantil de tres de septiembre de dos mil veinticuatro. xxviii. Copia simple del Contrato de comisión mercantil de uno de noviembre de dos mil veinticuatro. xxvix. Copia simple del Contrato de comisión mercantil de veinte de diciembre de dos mil veinticuatro. xxx. 2 Copias simples del Contrato de comisión mercantil de veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro. xxxi. 2 Copias simples del Contrato de comisión mercantil de veinte de enero de dos mil veinticinco. xxxii. Copia simple del Contrato de comisión mercantil de veinte de febrero de dos mil veinticinco de dos mil veinticuatro.



de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente:

“POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.”⁸

[lo resaltado es de esta juzgadora]

Por tanto, es inconcuso que, la peticionaria de amparo no cumplió con la carga procesal que le imponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, consistente en allegar al juicio de amparo, las pruebas idóneas y suficientes para acreditar fehacientemente la detentación de un derecho legítimamente tutelado susceptible de ser protegido a través de este medio de control constitucional.

En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que

⁸ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época , tomo XV, de febrero de 2002, página 5. Registro digital: 187733



CLARA IVET RODRIGUEZ VETTA
706a6620636a66320000000000000000117e
15/05/26 18:00:00

establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.”⁹

Esta determinación se robustece, con la prueba documental exhibida en copia certificada digitalizada (bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterada de su original)¹⁰ , por el tercero interesado, consistente en el convenio de terminación del contrato de operación de dos septiembre de dos mil veinticuatro, celebrado entre **Ejecutivos de Turismo Sustentable**, S.A. de C.V., y la parte quejosa, por medio del cual convienen la terminación del acuerdo de voluntades que presenta el quejoso para demostrar su interés jurídico, elemento que resta valor probatorio a la acreditación del interés por parte de la sociedad accionante.

En las relatadas condiciones, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, toda vez que no quedó probada la posesión que aduce tener del bien inmueble controvertido, por lo que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de alguna especie; de ahí que, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, procede **SOBRESEER** en el

⁹ *Jurisprudencia de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, visible con el registro digital 187777.*

¹⁰ Jurisprudencia P./J. 6/2024 (11a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el Registro digital: 2029378, de rubro: “DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PRESENTADOS ELECTRÓNICAMENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DE MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO NO GENERA LA PREVENCIÓN O REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. SINO QUE DEBAN VALORARSE COMO COPIA SIMPLE.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

“ACTO RECLAMADO. CUANDO NO AFECTA LOS INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de garantías cuando el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso; lo que interpretado en proposición contraria, significa que el amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos. Por tanto, no basta que el quejoso afirme que el acto reclamado perjudica sus intereses jurídicos, sino que es preciso, además, que el perjuicio tenga realidad objetiva y se demuestre fehacientemente; por lo que, surtiéndose la causal de improcedencia relativa, procede el correspondiente sobreseimiento del juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de la ley de la materia, en relación con el 74, fracción III, de este último ordenamiento.”¹¹

Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se

RESOLVE:

Primero. Se **Sobresee** en el presente juicio, promovido por **Fidel Arturo Ladrón de Guevara Bravo** en representación de la persona jurídica **“Proyectos Ejecutivos Sustentables”**, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los actos reclamados a la autoridad responsable en términos del último considerando de la presente resolución.

¹¹ Visible en el Semanario Judicial de la Federación. Séptima Época. Volumen 115-120, Cuarta Parte, página 9, con el registro 240927.



En esta propia fecha se libraron los oficios 27386, 27387, 27388, 27389, 27390, 27391, 27392 y 27393, en términos de la minuta que se agrega.- Conste.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

136180105_0791000039936366025.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	CLARA IVET RODRIGUEZ VEITIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.e9	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:13:12 - 09/12/25 21:13:12	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	82 1b 1b 8d 24 78 e2 67 a9 a0 40 38 a3 b8 df 7f bb 3a 17 27 a9 dc cc 0e b5 84 8e f2 b5 c5 ad f6 d3 1c 9e 64 05 03 38 02 be 97 ca 48 3e 75 77 8b b8 dd 7e 06 87 91 b1 7b cc 9b 21 59 d9 96 b7 a4 1c a6 99 bb 8e d5 85 bb c0 7f a6 91 41 d2 f9 d4 fa 1b 6f fe 48 29 e5 6d 40 97 b6 4c 64 03 f6 66 6b 85 8f c9 92 db e5 0e 2e 27 85 ac 90 ab e1 b3 7f 55 1a 29 1e 1a 8d 1e f0 da 8d 99 c5 2e 0f 35 b2 6d 94 42 0b 0b c6 df 98 23 55 88 da dd 24 33 27 68 a6 8b 18 9d 6e 55 91 af f2 9f 92 c1 14 69 73 d0 e1 5b 7c 57 b9 d2 8b 4b 8a 81 00 37 e1 e7 15 ae d1 e8 cf c8 da e4 09 01 d6 83 6c f3 46 84 ba 0d 20 1f e9 31 70 7f 5c a3 e7 1b a0 36 bc 46 7f 4e 36 26 ec 9d 7e 20 26 2f 46 df e7 d4 bf 3e 48 80 6e b5 8d 3e de f6 41 4f 17 73 f2 c9 64 28 0e 2e ed 35 c0 9e 31 f6 d6 89 6b 5e 4a 19 c9 5e			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:13:13 - 09/12/25 21:13:13			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.e9			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:13:13 - 09/12/25 21:13:13			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	92392731			
Datos estampillados:	Vr+OamZebU+nsfV/AQ8Ld+U9RJ8=			



FIRMANTE				
Nombre:	MARIA JOSE PECH SAENZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.0f.bd	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:20:49 - 09/12/25 21:20:49	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	5c 43 8b e8 f6 5a 32 7b ac ac f4 ec 26 1c ff b2 d3 ac 39 f3 ce e5 8b 26 32 ca ef 41 60 03 83 c8 f0 4a fb 40 1c 00 f4 da 8f 91 3d 29 40 39 73 f1 5c 43 27 fd 8f 3e 99 da de 0d d3 47 0c 23 0f ff ad 73 c9 a5 44 f5 56 67 ac a4 33 12 91 43 01 c0 c0 50 a8 ab c9 65 e6 ca 28 65 b0 0c 00 f5 5f f6 38 01 c5 cd e2 0f 4c f7 2d 95 46 dc 6d ce 02 2e b2 e7 4e 9d 2a 9f 67 d1 77 26 9a 7a b0 16 a7 42 be 3e 5b c2 f3 9d c5 a0 24 a8 64 0c dd 68 70 1c cb e4 41 f0 a3 eb 06 8b 89 e0 50 7c 3f 3b ba ec b2 72 77 9b b9 c0 88 45 5a 0e 5c a6 0b 3f 68 2d 65 8f 69 80 fb 97 25 da 45 eb 58 2f 30 22 4d 17 6d 0c ca 25 0a 82 cf b6 ba 43 86 40 50 c0 91 73 b9 5c 2f 33 6f 4e 0a fb 2d b3 79 8f 60 f4 85 5a f7 ec 50 d5 ec 48 72 fc 7d 93 14 93 9f 5b 43 f5 e9 d6 cc 06 b4 b5 12 82 3b 1a a2 2e 25 7d b1 75 ba 6c 07 b4 1e d4 f1 3a 08 c2 85 db 81 cc 4c 37 7a 14 67 6f fc 66 b8 96 2b ed 73 91 ad e4 c8 56 93 fa 61 18 ab 73 30 ca 2c 57 43 d9 72 cd e3 ce 63 52 25 01 20 71 de 0c 45 e2 9a ee 4a dd ef d6 ee d7 f7 7e f8 89 44 63 45 9e 14 6f 9f 35 b7 67 4a af ed 2a 66 ea cc 79 bc 09 b7 38 66 9d 90 f8 d7 8f 41 bb 6a c3 b2 4f f5 09 99 10 06 f0 33 3c bb ae 37 67 2e 00 26 23 3a 22 54 ce 55 c3 c1 55			
OCSF				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:20:50 - 09/12/25 21:20:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.0f.bd			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	10/12/25 03:20:50 - 09/12/25 21:20:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	92394649			
Datos estampillados:	Fkaf3VPMdxh/2sUbpf8AES4luKQ=			